



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2000, por la que se crea el Índice Nacional de Defunciones, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Ciertamente esta Agencia ha emitido diversos informes relacionados con la normativa reguladora del Índice Nacional de Defunciones, pudiendo hacer referencia entre otros a los de 14 de mayo de 1999, 2 de febrero de 2001 y 29 de diciembre de 2004, referidos a las distintas versiones de la Orden de 25 de febrero de 2000 y sus sucesivas modificaciones. No obstante, con posterioridad a la emisión de dichos informes entró en vigor el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, cuyo artículo 2.4 establece tajantemente que “Este Reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas”, sin perjuicio de que añade la norma que “No obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o tratamientos que contengan datos de éste con la finalidad de notificar el óbito, aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar a ello, la cancelación de los datos”.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el citado precepto y encontrándose el Índice Nacional de Defunciones referido exclusivamente a datos de personas fallecidas debe concluirse que las normas reguladoras del mismo no se encuentran sometidas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su



normativa de desarrollo, por lo que no procede efectuar observación alguna al Proyecto sometido al parecer de la Agencia.